

## COMPETENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL COSTARRICENSE. EL CASO DEL AMPARO CONTRA RESOLUCIONES JURISDICCIONALES.

*Víctor Eduardo Orozco Solano  
Letrado de la Sala Constitucional de la  
Corte Suprema de Justicia de Costa Rica*

**SUMARIO: INTRODUCCIÓN I. EL ORIGEN DEL RECURSO DE AMPARO EN EL DERECHO COMPARADO. LA SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y SUS COMPETENCIAS. IMPOSIBILIDAD DE AMPARO CONTRA RESOLUCIONES JURISDICCIONALES. CONCLUSIONES**

### Introducción

Aunque en el ordenamiento jurídico costarricense el recurso de amparo es un proceso de naturaleza sumaria o sumarísima que procede contra toda disposición, acuerdo o resolución y, en general, contra toda acción, omisión o simple actuación material no fundada en un acto administrativo eficaz, de los servidores y órganos públicos, que haya violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos reconocidos en la Constitución Política, como en los Instrumentos Internacionales en materia de Derechos Humanos vigentes en la República, el artículo 30 inciso b) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional veda la posibilidad de interponerlo contra las resoluciones jurisdiccionales, con lo cual se soslayan los alcances del derecho al amparo como garantía procesal y sustantiva del disfrute de las libertades aludidas, en los términos en que está consagrado no sólo en el artículo 48 de la Constitución Política, sino también en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Pese a los alcances de los derechos aludidos, en Costa Rica no existe la posibilidad de establecer un recurso de amparo contra resoluciones jurisdiccionales, con lo que se excluye un ámbito de la actividad estatal del control de derechos fundamentales, con menoscabo del derecho de acceso a la justicia.

De lo anterior se desprende, con toda claridad, que no existe en el ordenamiento jurídico costarricense la posibilidad de controlar las violaciones a los derechos fundamentales de las personas producidas con ocasión de la actividad jurisdiccional. Son numerosos los amparos que la Sala Constitucional rechaza o inadmite por esta circunstancia, en cuyo caso el particular afectado no tiene otra vía para hacer valer sus derechos frente a la actuación de la autoridad pública.

De modo que en esta investigación se pretende estudiar una parte de lo que Mauro Capelletti denomina la “*jurisdicción constitucional de la libertad*” -circunscrita a la protección de los derechos humanos- para contraponerlo a las clasificaciones desarrolladas por Fix-Zamudio, bajo las denominaciones de “*jurisdicción constitucional orgánica y jurisdicción constitucional transnacional*”. En este sentido, se debe coincidir con Ferrer

Mac-Gregor en el sentido que tales clasificaciones no se pueden analizar en forma aislada, en cuanto constituyen remedios integrales de protección de derechos humanos<sup>1</sup>.

Con este propósito, en este trabajo se examinará el origen del amparo en el derecho comparado y en el ordenamiento jurídico costarricense, su naturaleza jurídica y su regulación positiva en la Constitución Política de la República de Costa Rica, así como en la Ley de la Jurisdicción Constitucional, teniendo en consideración el objeto y la tipología de las sentencias dictadas por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en esta materia. Además, se realizarán algunos comentarios sobre las competencias asignadas a la Sala Constitucional.

También se determinará la razonabilidad de la exclusión contemplada en el artículo 30 incisos b) y c) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, relativos al dictado y a la ejecución de las resoluciones jurisdiccionales y su adecuación con el Derecho de la Constitución.

Finalmente, se examinarán los criterios jurisprudenciales sostenidos por la Sala Constitucional, cuando se ha referido sobre la regularidad constitucional de la norma comentada.

## I. El origen del recurso de amparo en el derecho comparado.

La mayor parte de la doctrina dedicada al estudio de la “jurisdicción constitucional de la libertad” ha considerado que el amparo es una institución de origen mexicano<sup>2</sup>, al ser previsto por primera ocasión en los artículos 8º, 9º y 12 de la Constitución yucateca de 1841, mientras que en el ámbito federal en la Constitución Mexicana de 1857 y en los artículos 103 y 107 de la Constitución de 1917<sup>3</sup>.

Desde ahí la institución del amparo fue acogida por varios países latinoamericanos y europeos, aunque con notables diferencias del antecedente mexicano. En este sentido, mientras el amparo mexicano comprende 5 funciones elementales -entre ellas, el amparo contra leyes, el amparo casación, el amparo libertad (hábeas corpus), la jurisdicción contencioso administrativa y la protección de los derechos fundamentales- sólo la última ha sido invocada en otros ordenamientos como el español, el venezolano, el colombiano y el costarricense como exclusiva de esta institución<sup>4</sup>.

En el ordenamiento jurídico brasileño, la institución del amparo está contemplada en el artículo 5-LXIX de la Constitución de 1988, que prevé el “mandado de segurança”, para proteger derechos no tutelados por el hábeas corpus o el hábeas data, cuando el

1 Ferrer Mac-Gregor, Eduardo. Del amparo nacional al amparo internacional. En <http://realidadjuridica.uabc.mx/realidad/files/amparo.doc>. pp 3.

2 Dejando de lado sus antecedentes remotos en el derecho romano (homine libero exhibendo e intercessio tribunicia), en el inglés (habeas corpus) y en el español (procesos aragoneses del medioevo).

3 Idem, pp 4.

4 Tocora, Luis Fernando. Control Constitucional y Derechos Humanos. Ediciones Librería del Profesional. Santa Fé de Bogotá, Colombia, primera edición, 1992. pp 108 y 109.

responsable de la ilegalidad o el abuso de poder sea una autoridad pública, o agente de persona jurídica en ejercicio de atribuciones del poder público<sup>5</sup>.

En el sistema español, el artículo 53.2 de la Constitución Española de 6 de diciembre de 1978 le atribuye al Tribunal Constitucional la competencia para conocer de los amparos constitucionales, mediante el cual se protegen las libertades y los derechos reconocidos en el artículo 14 y en la Sección primera del Capítulo II de esa Norma Fundamental, más la objeción de conciencia consagrada en el artículo 30. En este sentido, la doctrina española ha considerado que el recurso de amparo tiene 3 funciones capitales en ese ordenamiento, la primera, de instrumento de protección de los derechos y libertades señalados por la Constitución, la segunda, de un medio de control sobre la aplicación de los preceptos constitucionales por parte de los Jueces y Magistrados y, la última, para determinar mediante la interpretación el alcance y significado de las normas constitucionales<sup>6</sup>.

De lo anterior se ha entendido que el recurso de amparo en el ordenamiento español tiene un carácter híbrido -el cual también se puede apreciar en el amparo costarricense como se expondrá más adelante- en cuanto tiene por fin no sólo la protección particular y subjetiva del derecho fundamental menoscabado, sino también la defensa objetiva de la Constitución<sup>7</sup>.

Pero el amparo constitucional español también tiene grandes diferencias en relación con el amparo costarricense, dado que el primero es un proceso de carácter extraordinario y subsidiario, el cual únicamente se puede promover, en términos generales, si se han agotado todos los recursos utilizables en la vía judicial y ordinaria<sup>8</sup>. Es, por lo anterior que mediante dicho procedimiento, aunque no se trata de un recurso de revisión contra las sentencias dictadas por los órganos jurisdiccionales<sup>9</sup>, normalmente se controla la actividad desplegada por los órganos del Poder Judicial en el ejercicio de sus atribuciones. Ello no se produce en el caso costarricense, donde no existe un remedio específico para reparar las violaciones que se originen en este ámbito, como se verá más adelante.

### **El origen del amparo en el ordenamiento jurídico costarricense.**

Con anterioridad a la reforma de los artículos 10, 48, 105 y 128 de la Constitución Política -realizada por medio de la Ley Nº 7128 de 18 de agosto de 1989- y de la entrada en vigencia de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -Ley Nº 7135 de 11 de octubre de 1989- el recurso estaba regulado por la Ley de Amparo, Nº 1161 de 2 de junio de 1950<sup>10</sup>. En esta Ley se atribuía a la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia el conocimiento

5 Idem, pp 113.

6 García Morillo, J. Derecho Constitucional, tercera edición. Tirant lo Blanch. Valencia, 1997. pp 458 a 460.

7 González-Trevijano Sánchez, Pedro José. EL Tribunal Constitucional. Editorial Aranzadi, Sociedad Anónima, Navarra, España, 2000. pp 121.

8 Idem, pp 122.

9 Dado que se limita a verificar la violación de un derecho fundamental. Al respecto, el Tribunal Constitucional en el Auto 106/1980, de 26 de noviembre, denegó expresamente la naturaleza revisora del recurso de amparo respecto de la jurisdicción ordinaria, del siguiente modo: “dicho recurso no es una instancia de revisión del derecho aplicado por los Jueces y Tribunales y ni siquiera tiene la condición de casación(...) es un proceso procedimiento especial para el reconocimiento y restablecimiento de derechos fundamentales reconocidos y amparados en la Constitución, vulnerados incluso por actos judiciales, pero dejando en este caso bien a salvo el conocimiento de los hechos que dieron lugar al proceso y en cuya consideración no puede entrar el Tribunal Constitucional.”

10 Al respecto, se puede consultar. Carvajal Pérez, Marvin. O recurso de amparo na Costa Rica. Revista jurídica de Macau. Número especial. O direito de amparo em Macau e em direito comparado. 1999, pp 273.

de los recursos de amparo cuando el acto impugnado provenía del Presidente de la República, los Ministros de Gobierno, los Gobernadores de Provincia, los Comandantes de Plaza o el Director de la Guardia Civil, mientras que en los casos de las otras autoridades administrativas la competencia se asignaba a los jueces penales del lugar donde se verificaba la vulneración de los derechos.

Lamentablemente, no era eficiente el mecanismo implementado en esta ley, en la medida en que se asignaba el conocimiento de la mayoría de estos asuntos a los jueces penales, quienes no estaban acostumbrados a realizar interpretación constitucional, ni a tratar sobre la validez de los actos administrativos. Otro obstáculo que la doctrina ha señalado fue el requisito del agotamiento de la vía administrativa para acceder al amparo<sup>11</sup>.

Es, precisamente, con la mencionada reforma a la Carta Magna y con la entrada en vigencia de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que se encomienda a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia la potestad de conocer con exclusividad los recursos de amparo, entendiéndose como un instrumento procesal y sustantivo para la defensa efectiva de los derechos consagrados en la Constitución Política, como en los Instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos aplicables en la República.

En el siguiente capítulo se estudiará la Sala Constitucional y sus atribuciones, así como la regulación positiva del recurso de amparo.

## II. La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y sus competencias.

Con ocasión de la reforma a los artículos 10, 48, 105 y 128 de la Constitución Política, se atribuyeron al Tribunal Constitucional las siguientes competencias:

- La jurisdicción de constitucionalidad -artículos 10 y 128 constitucionales- para garantizar la supremacía y uniforme interpretación y aplicación del Derecho de la Constitución<sup>12</sup>;
- La jurisdicción de los derechos y libertades fundamentales, que tiene por objeto tutelar las libertades y los derechos humanos fundamentales<sup>13</sup>;
- y la jurisdicción de conflictos, con el fin de resolver las disputas de competencias entre los órganos constitucionales<sup>14</sup>.

Ahora bien, en lo que atañe a la Jurisdicción Constitucional costarricense, se debe advertir que nuestro modelo de justicia, al igual que el español o alemán, responde más al modelo concentrado que al difuso. Lo anterior por cuanto, mientras el difuso se caracteriza, fundamentalmente, por la potestad de que goza cada Juez para desaplicar con efectos *inter partes*, al resolver un caso concreto, una disposición contraria a la Constitución; el modelo concentrado, en cambio, determina la conformidad de una medida con la Norma

<sup>11</sup> Idem, pp 11.

<sup>12</sup> Piza Escalante, Rodolfo. *La Justicia Constitucional en Costa Rica*. Investigaciones Jurídicas, Sociedad Anónima, San José, Costa Rica, pp 87.

<sup>13</sup> Idem pp 88.

<sup>14</sup> Ibidem pp 89.

Fundamental mediante un juicio abstracto de constitucionalidad, cuyo resultado tiene efectos *erga omnes*, declarándose en consecuencia la nulidad de la disposición impugnada.

Este tema fue resuelto por la Sala Constitucional con ocasión de la consulta judicial facultativa de constitucionalidad formulada por el Juzgado Segundo de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda de San José, sobre la regularidad constitucional de los artículos 15 de la Ley Nº 6966 de 25 de setiembre de 1984 y 8º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Nº7333 de 5 de mayo de 1993. En efecto, en la sentencia Nº 1185-95 de las 14:33 hrs. de 2 de marzo de 1995, la Sala Constitucional dispuso:

*“la Sala estima que el artículo 8.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial no es inconstitucional, si se le interpreta en el sentido de que no autoriza a los funcionarios que administran justicia para desaplicar por propia autoridad ninguna ley, norma o acto de cualquier naturaleza que sea contrario a la Constitución Política, porque, para el caso en que tengan duda fundada acerca de la constitucionalidad de esas normas, deben, necesariamente, formular la consulta ante la Sala Constitucional. Debe agregarse, en este sentido, que esta interpretación es la única conforme con la Constitución Política, ya que por una parte se preserva el diseño constitucional de una Sala especializada y con poder concentrado para declarar la inconstitucionalidad, pero, por otra, no deja al juez en la tesitura de aplicar normas que estima inconstitucionales, lo cual, como alguien ha dicho, sería un pecado de lesa Constitución, al permitirle en ese caso, formular una consulta fundamentada al órgano con competencia para decidir el punto.”*

En esa oportunidad la Sala puso de manifiesto la noción concentrada -en el mayor grado- de nuestro sistema de Justicia Constitucional, y señaló que existe reserva constitucional en cuanto a la asignación de competencia para realizar el control de constitucionalidad<sup>15</sup>.

Ahora bien, este control jurídico concentrado de constitucionalidad lo desarrolla la Sala Constitucional de manera preventiva, a priori, y en lo sucesivo, a posteriori, según se desprende de las diversas disposiciones de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

En efecto, la Sala Constitucional realiza el control preventivo de constitucionalidad en los supuestos del artículo 96 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional; y lo hace de modo preceptivo, cuando se trate de proyectos de reformas constitucionales, de reformas a la Ley de la Jurisdicción Constitucional, así como de los tendientes a la aprobación de convenios o tratados internacionales; o de modo facultativo, cuando sea presentada por un número no menor de diez diputados, respeto de cualquier otro proyecto de ley, incluyendo las reformas al Reglamento de la Asamblea Legislativa.

15 En efecto, en esta sentencia la Sala consideró: “Como se ha dicho, en forma resumida, esa posibilidad del control en manos diferentes al órgano constitucionalmente señalado, queda fuera del alcance de la ley ordinaria, pues la materia constitucionalmente regulada automáticamente escapa a su ámbito y rango de regulación, como también se ha escrito en el ámbito de la doctrina nacional. Esta es la verdadera reserva que la Constitución establece en materia de control de constitucionalidad. Por ese motivo, hablamos aquí ya no simplemente del principio de legalidad, sino específicamente del principio de legalidad constitucional, que es su versión más calificada y atendible. Ante tal reserva, constituiría un sofisma afirmar que el principio de supremacía constitucional lleva a que toda autoridad pública -y obviamente todo juez- tiene competencia para desaplicar las normas inconstitucionales, independientemente del alcance que se le otorgue a ese acto.”

Esta norma también concede legitimación para promover la consulta a la Corte Suprema de Justicia, al Tribunal Supremo de Elecciones, a la Contraloría General de la República y al Defensor de los Habitantes, si se trata de proyectos de ley referidos a sus materias. En estos casos la Sala emite un dictamen o una opinión consultiva que resulta vinculante en cuanto establezca la existencia de trámites inconstitucionales del proyecto consultado, sin perjuicio que las cuestiones de fondo sean impugnadas nuevamente por las otras vías de control de constitucionalidad<sup>16</sup>.

Otra modalidad de control preventivo se verifica cuando el Poder Ejecutivo veta un proyecto de ley por motivos de constitucionalidad, cuyas razones no son aceptadas por la Asamblea Legislativa, de acuerdo con el artículo 128 de la Constitución Política<sup>17</sup>.

Pero la Sala también realiza el control a posteriori, o en lo sucesivo, en el caso de las consultas judiciales de constitucionalidad y en la acción de inconstitucionalidad.

Las primeras están reguladas en los artículos 102 a 106 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en cuya virtud el Juez puede plantear la consulta en aquellos casos en que tuviere dudas fundadas sobre la constitucionalidad de una norma o acto que deba aplicar, o de un acto, conducta u omisión que deba juzgar en un caso sometido a su conocimiento. En estos casos, la sentencia estimatoria del Tribunal Constitucional produce los mismos efectos que los de una acción<sup>18</sup>.

Por su parte, el objeto de las acciones de inconstitucionalidad está regulado en el artículo 73 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional<sup>19</sup>. Asimismo, el artículo 74 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, estipula que no cabe la acción contra los actos jurisdiccionales del Poder Judicial ni contra los actos o disposiciones del Tribunal Supremo de Elecciones, aunque a modo de interpretación se ha entendido que es procedente contra la Jurisprudencia reiterada de los Tribunales de Justicia<sup>20</sup>.

16 Al respecto, se puede consultar el artículo 101 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, así como la sentencia N°678-91 de las 14:16 hrs. de 27 de marzo de 1991.

17 Piza Escalante, Rodolfo. *La justicia constitucional en Costa Rica*. (op cit).

18 Al respecto se puede consultar el artículo 107 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

19 El artículo 73 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional establece:

“Cabrán la acción de inconstitucionalidad:

a) *Contra las leyes y otras disposiciones generales, incluso las originadas en actos de sujetos privados, que infrinjan, por acción u omisión, alguna norma o principio constitucional.*

b) *Contra los actos subjetivos de las autoridades públicas, cuando infrinjan, por acción u omisión, alguna norma o principio constitucional, si no fueren susceptibles de los recursos de hábeas corpus o de amparo.*

c) *Cuando en la formación de las leyes o acuerdos legislativos se viole algún requisito o trámite sustancial previsto en la Constitución o, en su caso, establecido en el Reglamento de Orden, Dirección y Disciplina Interior de la Asamblea Legislativa.*

ch) *Cuando se apruebe una reforma constitucional con violación de normas constitucionales de procedimiento.*

d) *Cuando alguna ley o disposición general infrinja el artículo 7º, párrafo primero, de la Constitución, por oponerse a un tratado público o convenio internacional.*

e) *Cuando en la suscripción, aprobación o ratificación de los convenios o tratados internacionales, o en su contenido o efectos se haya infringido una norma o principio constitucional o, en su caso, del Reglamento de Orden, Dirección y Disciplina Interior de la Asamblea Legislativa. En este evento, la declaratoria se hará solamente para los efectos de que se interpreten y apliquen en armonía con la Constitución o, si su contradicción con ella resultare insalvable, se ordene su desaplicación con efectos generales y se proceda a su denuncia.*

f) *Contra la inercia, las omisiones y las abstenciones de las autoridades públicas.”*

20 Sobre el particular, se puede ver la sentencia N°3180-93 de las 15:18 hrs. de 6 de julio de 1993.



En lo que toca a la legitimación para interponer la acción de inconstitucionalidad se debe observar el artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional<sup>21</sup>. El párrafo 1º de esta norma consagra la necesidad de acreditar la existencia de un asunto previo para interponer una acción de inconstitucionalidad. Unos la consideran la regla de oro en esta materia, de modo tal que conciben los otros supuestos -los de legitimación directa- como especiales o muy calificados y, por ende, se tiende a restringir la manera en que por ejemplo se percibe la noción de los intereses difusos; otros, por el contrario, la consideran como un supuesto más para promover la acción de inconstitucionalidad, por lo que -con fundamento en el principio democrático y con el fin de facilitar el acceso a la Jurisdicción Constitucional para garantizar la observancia preceptiva del principio de la supremacía de la constitución- no discriminan entre uno u otros supuestos e intentan interpretar esta disposición de la manera más amplia posible.

Así, de esta disposición se desprenden, con toda claridad, varias reglas importantes que debe tener en cuenta la parte del asunto previo para interponer la acción.

La primera de ellas, es que la existencia de un procedimiento jurisdiccional, independientemente de la materia de que se trate, sirve como asunto principal para interponer la acción. Esta afirmación, sin embargo, posee varios matices, entre los cuales se encuentra -siendo el más importante- el hecho de que se invoque esa inconstitucionalidad como medio razonable de amparar el derecho o interés que se estima lesionado.

Por ello, en el momento en que se valore la admisibilidad de una inconstitucionalidad fundada en la norma comentada, se debe determinar en primer lugar, que la impugnación de la disposición contraria al Derecho de la Constitución es medio razonable de tutelar el derecho que se discute en el proceso principal; esto es, que los efectos que se produzcan a consecuencia de una anulación por inconstitucional del precepto cuestionado tengan verdaderas repercusiones en el asunto previo, de modo tal que una de las partes del litigio pueda hacer valer sus pretensiones como resultado de la inconstitucionalidad declarada en el juicio abstracto de adecuación de una norma al Derecho de la Constitución. En segundo, el requerimiento de que se haya invocado expresamente la inconstitucionalidad en el asunto principal; en este sentido, el artículo 79 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional exige, entre otras cosas, la presentación de la certificación literal del libelo en que se alegó la inconstitucionalidad de la disposición impugnada en aquél, salvo en los supuestos de que se trate de un recurso de amparo o de hábeas corpus.

Ahora bien, otra de las reglas que consagra la norma comentada, tratándose de los supuestos en que el asunto principal corresponde a un procedimiento administrativo, consiste

---

21 El artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional estipula:

*“Para interponer la acción de inconstitucionalidad es necesario que exista un asunto pendiente de resolver ante los tribunales, inclusive de hábeas corpus o de amparo, o en el procedimiento para agotar la vía administrativa, en que se invoque esa inconstitucionalidad como medio razonable de amparar el derecho o interés que se considera lesionado.*

*No será necesario el caso previo pendiente de resolución cuando por la naturaleza del asunto no exista lesión individual y directa, o se trate de la defensa de intereses difusos, o que atañen a la colectividad en su conjunto.*

*Tampoco la necesitarán el Contralor General de la República, el Procurador General de la República, el Fiscal General de la República y el Defensor de los Habitantes.*

*En los casos de los dos párrafos anteriores, interpuesta la acción se seguirán los trámites señalados en los artículos siguientes, en lo que fueren compatibles.”*

en que se encuentre en la fase o etapa del agotamiento de la vía administrativa, de acuerdo con las hipótesis que en ese sentido estipula la Ley General de la Administración Pública. En efecto, no todo reclamo administrativo sirve como presupuesto para acceder al control de constitucionalidad, y son numerosos los casos en que la Sala rechaza de plano las acciones -a pesar de la claridad con que el artículo 75 párrafos 1 ° ídem impone tal exigencia procesal- por este vicio de legitimación.

Pero también se puede acceder a la acción de inconstitucionalidad de modo directo, en los supuestos del párrafo 2° del artículo 75 ídem. En este sentido, no se debe soslayar el hecho de que la interpretación de esta norma da pie a la formulación de múltiples teorías en cuanto a las maneras en que se puede interponer la acción directa de inconstitucionalidad.

La primera de estas teorías parte del supuesto de que la norma comentada no reconoce tres formas distintas de acceder al control de constitucionalidad, sino dos; de tal manera que en los casos en que se trata de la defensa de los intereses difusos, o bien de los que atañen a la colectividad en su conjunto, es necesario que se acredite la imposibilidad de que se formule una lesión individual o directa.

Así, el primero de los supuestos de legitimación que contempla el artículo 75 párrafo 2° ídem -sea la imposibilidad de que se acredite una lesión individual- no constituye, según esta teoría, un criterio de legitimación propiamente considerado, sino -más bien- una condición de los otros dos supuestos, por lo que si se acredita esa lesión individual no cabe la interposición de la acción directa de constitucionalidad. En este caso, el particular deberá promover el asunto principal correspondiente, si desea que la Sala Constitucional no rechace de plano la acción por falta de legitimación.

Esta noción parte de la suposición de que en los llamados intereses difusos, hacen referencia a la existencia de los intereses que son de todos<sup>22</sup> colectivamente, pero de ninguno individualmente considerados. Lo mismo se puede decir respecto de los intereses de los que atañen a la colectividad en su conjunto que tradicionalmente fueron estimados -según se expondrá más adelante- como los intereses corporativos.

Otra teoría con que se ha querido interpretar la norma comentada fue esbozada por el Magistrado Piza Escalante (q.d.D.g.), el cual sostiene que el artículo 75 párrafo 2° de la Ley de la Jurisdicción Constitucional consagra tres hipótesis distintas de legitimación que, sin embargo, en un asunto determinado pueden concurrir “rasgos de uno o de otro, se den dos o los tres conjuntamente”<sup>23</sup>. Tales son: cuando por la naturaleza del asunto no exista lesión individual o directa; se trate de la defensa de los intereses difusos; que atañen a la colectividad en su conjunto.

La primera de las hipótesis facilita la interposición de la acción directa de inconstitucionalidad, cuando la norma o acto impugnado no tiende, por sí mismo, a afectar en forma individual a un particular o a alguno de los miembros de la colectividad. En efecto, “es posible y hasta frecuente que, aun cuando haya uno o más destinatarios individuales y

22 Con ello se quiere decir que son los intereses de todos los que conforman una determinada colectividad, por ejemplo, los de los miembros de un determinado cantón del país, por el hecho de que, precisamente, habitan dentro de esta unidad administrativa.

23 Piza Escalante, Rodolfo. Legitimación Democrática en la Nueva Justicia Constitucional de Costa Rica. En el Libro Homenaje a Eduardo Ortiz Ortiz. Patrocinado por el Colegio Santo Tomas de Aquino de la Universidad Autónoma de Centro América. San José, Costa Rica, 1993. p 80.



directos de la norma en cuestión, empero, no se encuentre o no aparezca ningún interesado legítimo, individual y directo en su impugnación, por ejemplo porque frente a esa norma sólo haya beneficiarios o los únicos perjudicados posibles o fácilmente individualizables sean la sociedad como un todo, el Estado u otro ente público, sobre todo si sea de esperarse que sus jerarcas, a su vez, tiendan a ver en los intereses colectivos lo que la sabiduría popular ha bautizado como “bienes de difunto”; si es que no sean incluso ellos mismos beneficiarios, actuales o potenciales de la misma norma en cuestión. En tales supuestos, es evidente que, de no existir, o no aplicarse la excepción, simplemente una norma inconstitucional se consolidaría *ad perpetuam*, sin que la amorfa comunidad nacional ni el intangible Estado de Derecho tuvieran quien defendiera por ellos su propia legalidad constitucional”<sup>24</sup>.

Particularmente ilustrativo es el caso de una inconstitucionalidad contenida en una ley que distribuya competencias a los órganos constitucionales en abierta contradicción a la parte orgánica de la norma fundamental. En este supuesto, si bien ninguna persona se ve afectada por el contenido de esta disposición, en modo alguno debe justificar el que se mantenga vigente una situación contraria al Derecho de la Constitución.

Las otras dos hipótesis se refieren a los intereses colectivos, que Don Rodolfo llamó, por una parte, intereses difusos y, por otra, intereses corporativos. Ambos, sostenía el Magistrado Piza Escalante, no son: “intereses sustancialmente distintos, sino formas colectivas de ejercicio de los mismos intereses individuales —derechos subjetivos, intereses legítimos, simples intereses— por los miembros de una determinada colectividad o categoría de personas o de situaciones, los primeros, o por las entidades organizadas para velar por esos intereses, los segundos. De este modo, siempre que pueda identificarse un interés corporativo —a ejercerse por una entidad corporativa organizada— habrá a la vez uno difuso —de los miembros del grupo o categoría de personas o de situaciones que aquél simplemente representa unitariamente—, y siempre que haya un interés difuso habrá a la vez uno individual —exigible separada y específicamente por cada uno de esos miembros del grupo o categoría en cuestión—”<sup>25</sup>.

Por ello, para él tanto los intereses difusos, cuanto los intereses corporativos representan las dos caras de la misma moneda<sup>26</sup>, en la medida en que tal formulación tiene por fin facilitar el acceso al control de constitucionalidad de las actuaciones y las omisiones con poder normativo que violan la norma fundamental.

En suma, para Don Rodolfo los intereses difusos son, “precisamente, iguales y los mismos para todos y cada uno de los miembros de una determinada colectividad o categoría

---

24 Idem, p 83.

25 Ibidem p 85. En este sentido, el Magistrado Piza Escalante ejemplificaba esta situación de la siguiente manera: “una norma que regula, vgr., el cobro de honorarios por los abogados, su constitucionalidad puede ser discutida por cada abogado, mediante una acción individual, ordinaria o de amparo, y, con ésta como asunto previo, en la vía de una acción de inconstitucionalidad, declarada la cual regresará la cuestión al primero para su aplicación, siempre retroactiva, en el caso concreto del actor, a quien de esta manera podrá reconocerse, además de su derecho personal vulnerado, una indemnización por los daños y perjuicios que se le hayan causado; también puede cuestionarse por cualquier abogado directamente en la acción de inconstitucionalidad, invocando su interés difuso, el mismo e igual que el de sus colegas, en cuyo caso la declaración de inconstitucionalidad solamente podrá producirse en abstracto, declarando la nulidad de la norma impugnada con efecto general y, en Costa Rica “declarativo y retroactivo a la fecha de vigencia del acto o de la norma, todo sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe” (art. 91.1 Ley de la Jurisdicción Constitucional), pero con la posibilidad para la Sala de “graduar y dimensionar en el espacio, el tiempo o la materia su efecto retroactivo... para evitar que éste produzca graves dislocaciones de la seguridad, la justicia o la paz sociales” (art. 91.2 id.); o, finalmente, podrá ser impugnada por el Colegio —público— o por la Unión —sindical— de Abogados, en ejercicio de su interés corporativo como entidades llamadas a velar por los intereses comunes o gremiales de sus asociados.”

26 Ibidem, pp 57.

de personas, y en tanto que gestionados, no por la corporación como un todo, sino, individualmente, por cada uno de los propios miembros, afectados por los actos impugnados en la esfera de su situación individual y colectiva a la vez”<sup>27</sup>.

La tercera teoría con que se ha interpretado el artículo 75 párrafo 2º de la Ley de la Jurisdicción Constitucional reformuló el significado término “o los que atañen a la colectividad en su conjunto” que hacía referencia a la tutela de los intereses corporativos. Por el contrario, para esta última teoría dicha expresión alude a: *“aquellos cuya titularidad reposa en los mismos detentores de la soberanía, en cada uno de los habitantes de la República. No se trata por ende de que cualquier persona pueda acudir a la Sala Constitucional en tutela de cualesquiera intereses (acción popular), sino que todo individuo puede actuar en defensa de aquellos bienes que afectan a toda la colectividad nacional, sin que tampoco en este campo sea válido ensayar cualquier intento de enumeración taxativa”*<sup>28</sup>.

Por ende, para esta teoría el control de constitucionalidad en cuanto a las situaciones -activas u omisivas- que afectan el medio ambiente, el patrimonio cultural, la defensa de la integridad territorial del país y del buen manejo del gasto público, no se da con el propósito de proteger la existencia de un interés difuso, sino de los que atañen a la colectividad nacional en su conjunto. Lo anterior por cuanto, según esta teoría, en tales supuestos no se afecta un grupo particular de la colectividad, sino a toda ella.

Ahora bien, en lo que toca a los intereses corporativos -mejor llamados, colectivos- dicha noción los comprende en los supuestos en que se acredite la imposibilidad de una lesión individual o directa, por lo que sólo se les atribuye legitimación a las agrupaciones jurídicamente organizadas en los casos en que la actuación u omisión inconstitucional las afecta como tales -sea como entidades colectivas- y no cuando esa lesión afecta a sus miembros individualmente estimados, en cuyo supuesto el particular debe proveerse del asunto previo, para acceder al control de constitucionalidad conforme a la regla contemplada en el artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

En suma, esta teoría interpreta el artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional como si se tratara de un embudo invertido, en la medida en que conforme se desarrolla la lectura de esta disposición se van ampliando los supuestos en los que los particulares pueden acceder al control de la constitucionalidad contra las actuaciones y omisiones de las autoridades públicas con poder normativo que trasgreden el Derecho de la Constitución. Así, de lectura del párrafo inicial -en que se requiere la existencia del asunto pendiente de resolver en que se haya invocado la inconstitucionalidad de la norma impugnada como medio razonable de amparar el interés lesionado- se pasa al párrafo 2º, en que se tutelan por su orden: los casos en que existe la imposibilidad de se acredite una lesión individual o directa -que atañen a aquellos supuestos en que la norma u omisión afecta a una colectividad organizada pero, a su vez, a ninguno de sus miembros individualmente considerados- los intereses difusos -sea, de aquellos en que se protegen los de una colectividad particular y los cada uno de sus miembros- y los intereses de la colectividad en su conjunto -atinentes, precisamente a los de la colectividad nacional-.

<sup>27</sup> Ibidem, pp 56.

<sup>28</sup> Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, sentencia N°2001-8239, de las 16:07 horas de 14 de agosto de 2001.

Finalmente, el párrafo 3º del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional le reconoce a diferentes órganos estatales la posibilidad de interponer una acción directa de inconstitucionalidad, sin necesidad de acreditar la existencia de los supuestos mencionados con anterioridad.

Es discutible, sin embargo, si por ejemplo, en el caso del Contralor General de la República, éste puede promover una inconstitucionalidad con fundamento en esta disposición, sobre una materia distinta de la tutela de la hacienda pública, en la medida en que su competencia se encuentra circunscrita, según lo dispuesto en los artículos 183 y 184 de la Constitución Política, al control de la hacienda pública.

Es, precisamente, bajo la aplicación de las normas y de las disposiciones comentadas en los párrafos anteriores, que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia realiza el control de constitucionalidad.

Ahora bien, le corresponde a la Sala Constitucional resolver los conflictos de competencia o atribuciones entre los Poderes del Estado, incluido el Tribunal Supremo de Elecciones, o entre cualquiera de ellos y la Contraloría General de la República, así como los conflictos de competencia o atribuciones entre los poderes del Estado, incluido el Tribunal Supremo de Elecciones, o entre cualquiera de ellos y la Contraloría General de la República. También resuelve los conflictos de competencia o atribuciones constitucionales entre cualquiera de los poderes u órganos de los poderes u órganos dichos y las entidades descentralizadas, municipalidades u otras personas de Derecho Público, o los de cualquiera de éstas entre sí.

Finalmente, en lo que atañe a la protección de los derechos consagrados en la Constitución Política, como en los Instrumentos Internacionales en materia de Derechos Humanos vigentes en la República, el artículo 48 consagra el derecho de todo particular al amparo como una garantía procesal y sustantiva para asegurar su disfrute efectivo<sup>29</sup>. Así, en el ordenamiento jurídico costarricense toda persona, con independencia de su nacionalidad y de su status migratorio, tiene la posibilidad de establecer un recurso de hábeas corpus o de amparo para garantizar el goce pleno de su integridad o libertad personales, así como de los demás derechos consagrados en la Constitución, como en los Instrumentos Internacionales en materia de Derechos Humanos Vigentes en la República.

Tanto el recurso de amparo como el recurso de hábeas corpus son procesos sumarios, directos, declarativos y principales, puesto que se puede acudir al Tribunal Constitucional sin necesidad de agotar un trámite previo. La Ley de la Jurisdicción Constitucional desarrolla con detalle estos procedimientos.

---

29 EL artículo 48 de la Constitución Política de la República de Costa Rica establece que: “*Toda persona tiene derecho al recurso de hábeas corpus para garantizar su libertad e integridad personales, y al recurso de amparo para mantener o restablecer el goce de los otros derechos consagrados en esta Constitución, así como de los de carácter fundamental establecidos en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, aplicables en la República. Ambos recursos serán de competencia de la Sala indicada en el artículo 10.*”

## *El objeto del amparo en el ordenamiento jurídico costarricense, y la tipología de las sentencias dictadas por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en esta materia.*

Antes de examinar el objeto del amparo en el ordenamiento jurídico costarricense, conviene realizar una breve reflexión sobre su naturaleza jurídica. En este sentido, algunos procesalistas constitucionales han discutido si el amparo es un recurso, un proceso o una acción.

Sobre el particular, se debe mencionar que el amparo no es estrictamente un recurso, en la medida en que no tiene por fin revisar el acto dictado por el inferior, ni presupone un procedimiento anterior en el cual recayó la resolución que se recurre; el amparo, bajo esta óptica, no es una revisión del acto lesivo en cuanto a su legalidad o procedencia, sino una acción de control de constitucionalidad, no fiscaliza la justicia del acto reclamado, sino que tiene la virtud de restituir el derecho vulnerado<sup>30</sup>.

Pero el amparo tampoco se agota en el concepto de una mera acción, teniendo en cuenta que involucra muchos más elementos, entre ellos, la existencia de un proceso autónomo, lo que lo separa de la simple facultad que corresponde a una persona de requerir la intervención de un órgano estatal, para obtener la tutela de una pretensión jurídico material<sup>31</sup>.

Es claro que el proceso de amparo supone una sucesión coordinada de actos jurídicos, que inicia con la fase de admisibilidad de la acción, el requerimiento del informe a la autoridad recurrida sobre la situación impugnada, en algunas ocasiones una breve fase demostrativa -sin desvirtuar el carácter sumario y expedito del amparo, por supuesto- y la sentencia<sup>32</sup>, que en Costa Rica tiene eficacia de cosa juzgada material si es estimatoria<sup>33</sup>.

Con independencia de si se considera al amparo como un recurso, una acción o un proceso, sí se debe afirmar que posee, a diferencia de lo que sostienen algunos<sup>34</sup>, una doble vertiente procesal y sustantiva, con lo que se puede señalar que el proceso de amparo tiene una naturaleza dual.

Esta naturaleza dual, procesal y sustantiva, del proceso de amparo se infiere, con toda claridad, del contenido de los artículos 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos<sup>35</sup> y 48 de la Constitución Política, en cuya virtud toda persona tiene el

30 Bidart Campos, German. *Derecho de amparo*. Ediar Editores, Buenos Aires, Argentina, 1961, pp 287.

31 Guzmán Hernández, Martín Ramos. *El amparo fallido*. Publicación de la Corte de Constitucionalidad, segunda edición, Guatemala, 2004. pp 48 y 49.

32 Sobre el particular, el mismo autor sostiene que: "el proceso implica una pretensión, contenciosa o extracontenciosa. En lo relativo a este punto es indiscutible que si un particular insta la actividad del juez o tribunal constitucional pidiendo amparo, lo hace con una pretensión específica, que estriba en que ese órgano ejerza control sobre los actos autoritarios de los poderes del Estado o algunos particulares cuando la relación subyacente implique grado de subordinación y que, como corolario, restablezca la situación jurídica afectada mediante la tutela y restitución pronta y efectiva de los derechos fundamentales que fueron vulnerados con la emisión del acto anticonstitucional."

33 Existe consenso en la jurisprudencia como en la doctrina en el sentido de que sólo las sentencias estimatorias tienen eficacia de cosa juzgada material. Sobre el particular, Piza Escalante, Rodolfo. *La Justicia Constitucional en Costa Rica*. (op cit), pp 190.

34 Al respecto, Hernández Valle, Rubén. *Derecho Procesal Constitucional*. Editorial Juriscentro, Sociedad Anónima, Segunda Edición, San José, Costa Rica, 2001 pp 205.

35 El artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone:

"Artículo 25.- Protección Judicial. 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aún cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales."

derecho a obtener una protección jurisdiccional de sus libertades por parte del órgano correspondiente<sup>36</sup>.

De modo que el amparo, más que un remedio procesal específico, por sí mismo constituye un derecho fundamental, mediante el cual toda persona puede hacer efectiva la tutela de sus derechos vulnerados, obteniendo una reparación inmediata e integral<sup>37</sup>. Al respecto, Gomes Canotilho consideró *“las clásicas garantías constitucionales son también derechos y no simplemente mecanismos de carácter instrumental, ya que éstas se traducen en el derecho de los ciudadanos de exigir a los poderes públicos la protección de sus derechos”*<sup>38</sup>.

Con lo anterior de ninguna manera se pretende desconocer la noción instrumental que reviste el amparo en los distintos ordenamientos jurídicos, sino potenciar su carácter complejo y dual, al constituir el proceso de amparo no sólo una garantía constitucional sino un derecho fundamental por sí mismo<sup>39</sup>. Es, precisamente, bajo esta perspectiva que se analiza el amparo en esta investigación.

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, el recurso de amparo garantiza los derechos y libertades fundamentales a que se refiere esa ley, salvo los protegidos por el de hábeas corpus.

De modo que mediante el derecho al amparo la persona afectada puede asegurar el disfrute de todos los derechos consagrados en la Constitución Política, así como en los instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos aplicables en la República, salvo los relativos a la libertad y a la integridad personales, los cuales son susceptibles de tutela a través del hábeas corpus<sup>40</sup>.

A diferencia del amparo constitucional español, en el ordenamiento jurídico costarricense no existe una lista taxativa de derechos tutelables por medio del amparo. En este sentido, la protección se hace extensiva tanto a los derechos individuales, civiles y políticos, cuanto a los derechos económicos, sociales y culturales, así como cualquier otro cuyo goce sea necesario para asegurar el máximo respeto de la dignidad humana.

---

## 2. Los Estados Partes se comprometen:

a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso;

b) a desarrollar las posibilidades del recurso judicial, y

c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”

---

36 Brewer Carías, Allan. *El amparo a los Derechos Humanos y a las libertades constitucionales (una aproximación comparativa)*. XI Curso Interdisciplinario en Derechos Humanos. Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José, Costa Rica, 1993.

37 Brenes Montoya, María Marta. *El incumplimiento de las resoluciones de amparo*. Tesis para optar al título de Licenciada en Derecho. Universidad de Costa Rica, San José 2005. pp 20.

38 Canotilho, José Joaquín Gomes. *Direito Constitucional e Teoria da Constituição*. 3 Edição. Livraria Almedina Coimbra, 1998, pp 372.

39 Brenes Montoya, María Marta. *El incumplimiento de las resoluciones de amparo*. (op cit) pp 21.

40 Al respecto, el artículo 15 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional dispone que: *“Procede el hábeas corpus para garantizar la libertad e integridad personales, contra los actos u omisiones que provengan de una autoridad de cualquier orden, incluso judicial, contra las amenazas a esa libertad y las perturbaciones o restricciones que respecto de ella establezcan indebidamente las autoridades, lo mismo que contra las restricciones ilegítimas del derecho de trasladarse de un lugar a otro de la República y de libre permanencia, salida e ingreso en su territorio”*.

En lo que toca a los actos impugnables a través del amparo, el artículo 29 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional señala que procede contra toda disposición, acuerdo o resolución y, en general, contra toda acción, omisión o simple actuación material no fundada en un acto administrativo eficaz, de los servidores y órganos públicos, que haya violado, viole o amenace violar cualquiera de aquellos derechos. Además, procede no sólo contra los actos arbitrarios, sino también contra las actuaciones u omisiones fundadas en normas erróneamente interpretadas o indebidamente aplicadas.

En este sentido, se debe mencionar que por medio del recurso de amparo casi toda la actividad administrativa es susceptible de control, siempre que incida sobre los derechos fundamentales de un particular, a menos que la situación impugnada esté prevista en alguno de los supuestos regulados en el artículo 30 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, sobre los cuales no es admisible el amparo. Tales son:

- El amparo contra normas jurídicas. Al respecto, se debe advertir que si bien el artículo 30 inciso a) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional veda la posibilidad de establecer un proceso de amparo contra una norma jurídica, aquí la regla más bien es la excepción, en la medida en que se puede interponer contra una norma jurídica de naturaleza autoaplicativa, o autoejecutable -una norma tributaria, por ejemplo- o conjuntamente con el acto lesivo que pretende sustentarse en esa disposición. En este caso, la Sala confiere un plazo improrrogable de 15 días al recurrente, para que formule la acción de inconstitucionalidad contra la norma impugnada, reservándose el dictado de la sentencia del amparo hasta que sea conocida aquella<sup>41</sup>.

- El amparo contra resoluciones jurisdiccionales y sus actos de ejecución. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 incisos b) y c) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, no se puede formular el amparo contra los actos aludidos. Quienes defienden la razonabilidad de estas disposiciones, se sustentan en el principio de independencia del juez y en el contenido de los artículos 10 de la Constitución Política y 74 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, según los cuales no se puede efectuar el control de constitucionalidad sobre estas decisiones<sup>42</sup>. Es claro que esta limitación no tiene asidero en el ordenamiento jurídico vigente. Lo anterior por cuanto, una cosa es el ejercicio del control de constitucionalidad -consagrado, como se expuso supra, en el artículo 10 de la Constitución Política- y sobre el cual el Constituyente derivado excluyó las resoluciones jurisdiccionales, pero otra muy distinta es la competencia relativa a la jurisdicción constitucional de la libertad -consagrada, como se dijo con anterioridad, en el artículo 48 de la Constitución Política, en cuya virtud toda persona tiene el derecho de interponer un recurso de amparo, como garantía procesal y sustantiva para el disfrute efectivo de sus

41 Sobre el particular, se puede consultar el artículo 48 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

42 Sobre el particular, en la sentencia N°3988-92 de las 15:39 hrs. de 15 de diciembre de 1992, la Sala señaló: "Ninguna diferencia habría, en cuanto a sus consecuencias, entre la declaratoria de inconstitucionalidad de una sentencia -o de cualquier otra resolución o actuación jurisdiccional- y el hecho de acoger un amparo contra ella, ya que en ambos casos los que se produciría sería su nulidad, a efecto de que sea repuesta por un nuevo pronunciamiento -libre del vicio que la Sala hubiere determinado- pues esta carecería de competencia para pronunciar otra en lugar de la que se anula (...). Este hecho -que se trata de inconstitucionalidad para el caso concreto- motivó que, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 10 indicado, el legislador plasmara la prohibición -en la ley que regula la competencia de la Sala- tanto en el inciso b) del artículo 30 como en el 74, así que en razón de lo expuesto la prohibición no devendría inconstitucional, toda vez que el constituyente derivado lo que quiso fue reservar el conocimiento de la jurisdicción constitucional las resoluciones y actuaciones jurisdiccionales (...) de todo pronunciamiento de inconstitucionalidad -ya fuere en las acciones propiamente tales, como en los procesos de amparo-."



derechos- la cual se debería efectuar sobre toda la actividad estatal, incluyéndose lógicamente la jurisdiccional.

- El amparo contra actuaciones y omisiones válidamente consentidas por la persona agraviada. Sobre el particular, son varias las situaciones que permiten sostener el consentimiento del particular afectado sobre el acto o la omisión cuestionada. En este sentido, esta disposición -el artículo 30 inciso ch) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional- normalmente es interpretada en relación con el artículo 35 ídem, que establece un término de prescripción de 2 meses a partir del momento en que hayan cesado totalmente sus efectos directos respecto del perjudicado<sup>43</sup>.

- El amparo contra actos o disposiciones del Tribunal Supremo de Elecciones en materia electoral. Lo anterior se infiere, con toda claridad, del contenido del artículo 102 inciso 3) de la Constitución Política, en cuya virtud le corresponde al Tribunal Supremo de Elecciones interpretar en forma exclusiva y obligatoria las disposiciones constitucionales y legales referentes a la materia electoral.

En lo que atañe a la legitimación activa en el amparo, el artículo 33 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional establece que cualquier persona puede interponerlo. Lo anterior, sin embargo, no debe ser interpretado en el sentido de que existe una acción popular en el amparo costarricense; por el contrario, la Sala Constitucional ha sostenido que dicha expresión hace referencia al agraviado en un derecho constitucional o a todas aquellas personas que lo interpongan a su favor. Es decir, toda persona está habilitada para promover esta acción (individual o colectiva) pero en el entendido de que si la plantea el agraviado, éste deberá ser el titular del derecho constitucional lesionado y si lo interpone otra persona que no sea el agraviado, será a favor de éste<sup>44</sup>.

Por su parte, en lo que respecta a la legitimación pasiva, el amparo debe dirigirse contra el servidor o el titular del órgano que aparezca como presunto autor del agravio. Además, si se ignora la identidad del servidor el recurso debe ser establecido contra el jerarca. También se contempla la posibilidad de tener como parte al tercero que derive derechos de la situación impugnada.

Pero el recurso también se puede dirigir contra los sujetos particulares, de acuerdo con el artículo 57 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Cabe mencionar que el recurso de amparo en el ordenamiento jurídico costarricense, lejos de ser un proceso complejo y plagado de ritos, está desprovisto de todo formalismo y su tramitación es sencilla y célere. En este sentido, no hace falta agotar ningún trámite previo para interponer el amparo, el cual puede ser presentado sin autenticación, por cualquier medio escrito, incluso por telegrama<sup>45</sup>.

43 Sobre el acto consentido, la Sala Constitucional, en la sentencia N°7643-97 de las 12:54 hrs. de 14 de noviembre de 1997, dispuso: “una de las condiciones de inadmisibilidad del amparo en general la constituye el hecho de que el presunto agraviado haya consentido legítimamente el hecho (...). Este consentimiento puede ser expreso o tácito, este último como resultado del hecho de que no se ejerzan, en tiempo y forma, los remedios legales al alcance del ofendido para obtener la tutela de su derecho, todo lo cual conduce a la inadmisibilidad de la acción”.

44 Sobre el particular, se puede analizar la sentencia N°93-90 de las 10:00 hrs. de 24 de enero de 1990.

45 Al respecto, se puede observar los artículos 31 y 38 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

En este orden de ideas, el artículo 38 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional únicamente señala la obligación del recurrente de expresar, con la mayor celeridad posible, el hecho o la omisión que lo motiva, el derecho que se considera violado o amenazado, el nombre del servidor público o del órgano autor de la amenaza o del agravio, y las pruebas de cargo. En efecto, si el accionante soslaya alguno de estos requisitos, el artículo 42 ídem contempla la posibilidad de realizar una prevención al actor para que subsane esa situación, bajo apercibimiento de rechazar de plano el recurso si no lo hiciere.

Cabe señalar que la tramitación inicial del amparo está encomendada al Presidente de la Sala Constitucional, quien debe resolver acerca de su admisibilidad. Si la queja resulta pertinente, el Presidente emite una resolución inicial, en que se confiere un plazo a la autoridad recurrida para que rinda su informe sobre la situación impugnada. En esta resolución, normalmente se turna el asunto a la oficina del Magistrado que corresponda, quien será la persona encargada de su tramitación, y de elaborar una ponencia con la ayuda de sus Letrados que con posterioridad debe defender ante el pleno.

Ahora bien, si el informe no es presentado a la Sala dentro del término aludido, el artículo 45 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional contempla la posibilidad de tener por ciertos los hechos alegados por el actor, pudiéndose estimar el amparo si es procedente en derecho<sup>46</sup>.

Uno de los elementos integrantes del derecho al amparo como garantía procesal y sustantiva para asegurar el disfrute de los derechos consagrados en la Constitución Política, como en los Instrumentos Internacionales en materia de Derechos Humanos aplicables en la República, es la facultad de suspender de pleno derecho los alcances del acto impugnado, en los términos que en está desarrollado en el artículo 41 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, relativo a las medidas cautelares<sup>47</sup>. En este sentido, el incumplimiento de la medida cautelar en alguna ocasión incluso sirvió para estimar el recurso, por la violación del derecho al amparo en los términos en que está consagrado en el artículo 48 constitucional<sup>48</sup>. Lamentablemente, esta disposición no ha sido interpretada

46 En la sentencia N°5483-94 de las 18:51 hrs. de 21 de setiembre de 1994, la Sala Constitucional consideró: “De conformidad con el artículo 45 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, si la autoridad recurrida no rinde su informe, se tienen por ciertos los hechos alegados por el recurrente y se entra a estudiar la procedencia del amparo, con la base fáctica por él expuesta. Ello, en consecuencia, no implica que automáticamente se acoja el recurso”.

47 El artículo 41 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional establece:

«Artículo 41.- La interposición del amparo no suspenderá los efectos de leyes u otras disposiciones normativas cuestionadas, pero sí la aplicación de aquéllas al recurrente, así como la de los actos concretos impugnados. Sin embargo, en casos de excepcional gravedad la Sala podrá disponer la ejecución o la continuidad de la ejecución, a solicitud de la Administración de la que dependa el funcionario u órgano demandado, o aún de oficio, cuando la suspensión cause o amenace causar daños o perjuicios ciertos e inminentes a los intereses públicos, mayores que los que la ejecución causaría al agraviado, mediante las cautelas que considere procedentes para proteger los derechos o libertades de este último y no hacer ilusorio el efecto de una eventual resolución del recurso a su favor. La suspensión operará de pleno derecho, y se notificará sin demora al órgano o servidor contra quien se dirige el amparo, por la vía más expedita posible. De igual modo, el Presidente o el Magistrado instructor podrán dictar cualquier medida de conservación o seguridad que la prudencia aconseje, para prevenir riesgos materiales o evitar que se produzcan otros daños como consecuencia de los hechos realizados, todo conforme con las circunstancias del caso. La Sala podrá, por resolución fundada, hacer cesar en cualquier momento la autorización de ejecución o las otras medidas cautelares que se hubieren dictado.»

48 En la sentencia N°2002-11445 de las 09:30 hrs. de 29 de noviembre de 2002, la Sala Constitucional manifestó: “VI.- Estimatoria parcial del recurso. Por último, la Sala tiene por cierto que el INS ejecutó la suspensión ordenada en el acto final del procedimiento administrativo aquí impugnado y que las agencias del INS se negaron a recibir las pólizas que había vendido en los días posteriores al comunicado de la suspensión, a pesar de que por resolución de 16:29 hrs. de 26 de abril de 2002, la Sala había ordenado al Jefe de la Dirección de Mercadeo y Ventas del Instituto Nacional de Seguros no aplicar la sanción de suspensión de un año dispuesta en contra el amparado (f. 19 y 20). Dicha resolución fue notificada a los recurridos el 30 de abril de 2002. El 22 de mayo de este año, el recurrente presentó un nuevo amparo en el cual reclamaba este extremo, el cual fue agregado a este expediente por resolución de la Presidencia de la Sala de 13:27 hrs. de 22 de mayo de 2002 (f. 368) y se pidió informe al Jefe del Departamento de Mercadeo sobre el particular, el cual no fue rendido. Únicamente en cuanto a este extremo procede declarar con lugar el recurso ya que,

en su sentido literal en la Sala, por lo que se ha entendido que el Presidente del Tribunal Constitucional goza de cierta discrecionalidad para dilucidar si suspende o no los efectos del acto reclamado.

Las sentencias dictadas por la Sala Constitucional con ocasión de los recursos de amparo, pueden ser de diversos tipos, según los artículos 9º y 49 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

El artículo 9º de la Ley de la Jurisdicción Constitucional<sup>49</sup> permite a la Sala rechazar de plano un asunto -sin requerir el informe de la autoridad recurrida- siempre que el asunto no reúna los requisitos mínimos de admisibilidad, o se impugne una situación que no es susceptible de control por medio del amparo<sup>50</sup>. También puede la Sala rechazar por el fondo un caso de manera anticipada, si existe reiterada Jurisprudencia en el sentido de que lo cuestionado no lesiona los derechos fundamentales de un particular.

Pero también el Tribunal Constitucional, en materia de amparo, puede dictar una sentencia desestimatoria, si concluye que de los hechos expuestos por el recurrente no se desprende ninguna vulneración de sus derechos fundamentales.

En las sentencias estimatorias, en cambio, sí acredita la infracción de alguno de estos derechos, motivo por el cual el Tribunal Constitucional bien puede dejar sin efecto el acto cuestionado, u ordenar a la autoridad recurrida la adopción y la ejecución de las medidas pertinentes para reparar con la mayor celeridad posible la trasgresión de los derechos del afectado.

En el artículo 49 párrafo 2º de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, incluso se establece una especie de amparo por omisión, si la pretensión estriba en que la autoridad

---

*aparte de las consecuencias penales que acarrea la desobediencia a las órdenes de esta Jurisdicción dictadas en recursos de amparo, el hecho de que el Instituto mantuviera la ejecución de la suspensión impugnada en este amparo, una vez que la Sala le había ordenado la suspensión, dentro de un procedimiento especialmente previsto en la Constitución para la tutela de los derechos fundamentales y a sabiendas de que la suspensión dispuesta en el artículo 41 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional opera de pleno derecho, resulta violatoria, en primer lugar, del derecho fundamental al amparo, porque vulnera directamente una de las consecuencias principales de su ejercicio, cual es que el goce de los derechos se mantenga incólume mientras no sea resuelto el asunto -salvo las excepciones previstas en la misma norma-, aparte del derecho fundamental al debido proceso, porque una sanción impugnada en la vía de amparo y sobre la cual la Jurisdicción Constitucional ha reconocido que procede suspender su ejecución no puede ser válidamente ejecutada; todo lo anterior, con severas consecuencias para la actividad comercial que emprende el recurrente y para su propio sostenimiento y el de su familia. En cuanto a la desobediencia, procede testimoniar piezas al Ministerio Público para que investigue al Jefe de la Dirección de Mercadeo del Instituto Nacional de Seguros, José Luis Soto Rodríguez, cédula #1-522-880, por el presunto delito previsto en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.- »*

49 El artículo Artículo 9º de la Ley de la Jurisdicción Constitucional establece:

*“La Sala Constitucional rechazará de plano cualquier gestión manifiestamente improcedente o infundada.*

*Podrá también rechazarla por el fondo en cualquier momento, incluso desde su presentación, cuando considere que existen elementos de juicio suficientes, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada; en este caso siempre que no encontrare motivos para variar de criterio o razones de interés público que justifiquen reconsiderar la cuestión.*

*Asimismo, podrá acogerla interlocutoriamente cuando considere suficiente fundarla en principios o normas evidentes o en sus propios precedentes o jurisprudencia, pero si se tratare de recursos de hábeas corpus o de amparo deberá esperar la defensa del demandado.”*

50 Como lo es el caso del artículo 30 inciso b) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

reglamente, cumpla o ejecute lo que una ley u otra disposición normativa ordena, en cuya supuesto el recurrido tiene un plazo perentorio de 2 meses para solventar esa prevención.

En cuanto a los modos anormales de terminación del proceso, éstos normalmente se producen si la parte llega a desistir del asunto, o si se produce una satisfacción extraprocesal, en los términos en que está regulado en el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

### III. Imposibilidad de amparo contra resoluciones jurisdiccionales

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 inciso b) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, no se puede promover un recurso de amparo contra resoluciones y actuaciones jurisdiccionales, ni contra los actos de ejecución de los primeros.

Aunque estas disposiciones pretenden sustentarse en el artículo 10 de la Constitución Política, según el cual: *“No serán impugnables en esta vía los actos jurisdiccionales del Poder Judicial, la declaratoria de elección que haga el Tribunal Supremo de Elecciones y los demás que determine la Ley”*, es evidente que esta disposición no está referida a la jurisdicción constitucional de la libertad -que, como se expuso con anterioridad está consagrada en el artículo 48 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en que se reconoce a todo particular el derecho al amparo como garantía procesal y sustantiva de sus libertades esenciales- sino al control de constitucionalidad de las normas jurídicas, con lo que en el fondo se trata de dos competencias distintas, que la Constitución Política de la República de Costa Rica le atribuye a la Sala Constitucional.

En este sentido, si bien la Sala Constitucional goza de la competencia para declarar contraria al Derecho de la Constitución una norma jurídica que vulnera un derecho fundamental, ello no lo hace en ejercicio de la competencia prevista en el artículo 48 de la Carta Magna, sino por medio del control de constitucionalidad estrictamente considerado, lo cual está regulado por el artículo 10.

En este orden de ideas, mientras que en el segundo caso, es la propia Constitución la que excluye del control de constitucionalidad las resoluciones jurisdiccionales, es distinto el supuesto de la jurisdicción constitucional de la libertad, en el cual la Norma Fundamental no contempla ninguna restricción.

De modo que el Legislador no debería introducir injustificadamente restricciones o limitaciones que la propia Constitución no contempla<sup>51</sup>, pues con ello lo que hace es reducir el ámbito de protección de los derechos fundamentales, los cuales lógicamente pueden ser vulnerados con ocasión de la actividad jurisdiccional, sin que exista un remedio específico en la vía constitucional para solucionar esa situación.

Es evidente que el caso mencionado no sólo vulnera el derecho al amparo según está regulado en el artículo 48 constitucional, sino también en el artículo 25.1 de la

51 Con menoscabo de los principios pro homine y pro libertad, los cuales informan lógicamente todo el funcionamiento de la Justicia Constitucional.

Convención Americana sobre Derechos Humanos, en que se consagra el derecho de toda persona a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aún cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones judiciales, todo lo cual es soslayado en el caso presente.

En el derecho comparado, por ejemplo, es normal que mediante los recursos de amparo se controlen las violaciones a los derechos fundamentales producidas a causa de la actividad jurisdiccional. Tal es el caso español, en que el artículo 44.1 de la Ley Orgánica 2/1979 de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, exige como requisito previo para poder interponer el amparo constitucional el que se hayan agotado todos los recursos utilizables dentro de la vía judicial y, además, que la violación del derecho sea imputable de modo inmediato y directo a una acción u omisión del órgano judicial con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que aquellas se produjeron.

El amparo contra resoluciones jurisdiccionales también es posible en Venezuela, Perú, México, Guatemala y Colombia, aunque con regulaciones distintas<sup>52</sup>.

Por otra parte, no se aprecia alguna razón que justifique el hecho de que se pueda plantear un recurso de hábeas corpus contra resoluciones jurisdiccionales -por ejemplo, aquella en que se dicta a un imputado la medida cautelar de prisión preventiva, por haber omitido el Juzgado Penal exponer los presupuestos procesales que sustentan su imposición<sup>53</sup>- pero no un recurso de amparo si se trata de la violación de un derecho distinto de la libertad e integridad personales, teniendo en cuenta que ambos procesos son diversas manifestaciones de la jurisdicción constitucional de la libertad, de acuerdo con el artículo 48 de la Norma Fundamental.

Cabe mencionar que las omisiones o las dilaciones injustificadas de los órganos jurisdiccionales de resolver los asuntos sometidos a su conocimiento sí son susceptibles de control por la violación del derecho consagrado en el artículo 41 constitucional<sup>54</sup>, en que se reconoce el derecho a la justicia pronta y cumplida, por lo que no se observa ninguna razón o circunstancia que permita excluir las conductas positivas de los Juzgadores.

Aunque se puede justificar esta restricción en el principio de independencia del juez, de llegar a admitirse el amparo contra resoluciones jurisdiccionales no se produciría ninguna intromisión indebida de la Sala Constitucional en el ámbito de competencia del Juzgador, dado que el Tribunal Constitucional únicamente se limitaría a constatar y a declarar la violación de un derecho fundamental, pero no a resolver la situación jurídica de fondo que dio origen a ese procedimiento.

Es innegable, desde un punto de vista sociológico jurídico, que si se reconoce el amparo contra resoluciones jurisdiccionales ello probablemente produciría un aumento

52 Brewer Carías, Allan. *El amparo a los Derechos Humanos y a las libertades constitucionales (una aproximación comparativa)*. XI Curso Interdisciplinario en Derechos Humanos (op cit) pp 107 a 112.

53 Sobre el particular, se puede ver la sentencia N°2005-10597 de las 15:37 hrs. de 16 de agosto de 2005, entre muchas otras.

54 En este sentido, la sentencia N°4126-97 de las 18:06 hrs. de 16 de julio de 1997, entre otras tantas.

significativo del circulante de asuntos que conoce el Tribunal Constitucional; no obstante, ello no debe ser óbice para excluir del control de derechos fundamentales esta actividad estatal, o para dejar incólumes las infracciones a estas libertades que efectúe el Juez.

Ahora bien, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por medio de la sentencia Nº 2277-92 de las 16:30 hrs. de 18 de agosto de 1992, se pronunció sobre la regularidad constitucional del artículo 30 inciso b) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, determinándose por mayoría que no vulnera el Derecho de la Constitución.

En este pronunciamiento el Tribunal Constitucional confundió las competencias relativas al control de constitucionalidad de las normas jurídicas, que no puede recaer sobre las resoluciones jurisdiccionales por fuerza del artículo 10 constitucional, y la atinente a la jurisdicción constitucional de la libertad, sobre la cual la Constitución no establece ningún impedimento. Lo anterior por cuanto, en dicha sentencia se dijo: *“ninguna diferencia habría, en cuanto a sus consecuencias, entre la declaratoria de inconstitucionalidad de una sentencia -o de cualquier otra resolución o actuación jurisdiccional- y el hecho de acoger un amparo contra ella, ya que en ambos casos lo que se produciría sería su nulidad, a efecto de que sea repuesta por un nuevo pronunciamiento -libre de vicio que la Sala hubiere determinado- pues esta carecería de competencia para pronunciar otra en lugar de la que se anula”*.

Es claro que el legislador, al establecer la restricción aludida, introdujo una limitación al derecho de amparo que no estaba prevista por la Constitución, con menoscabo de los principios *pro homine* y *pro libertad*.

Tampoco es admisible la justificación histórica que hace la sentencia aludida para reconocer la posibilidad de establecer un hábeas corpus contra una resolución jurisdiccional, pero no un recurso de amparo<sup>55</sup>, teniendo en cuenta que ambos son diversas manifestaciones de la Jurisdicción Constitucional de la libertad, como se expuso supra. Menos aún es acertada la pretensión de justificar la imposibilidad de amparo contra resoluciones jurisdiccionales, en el hecho que *“el ejercicio de la judicatura debe estar en manos de personas que por su conocimiento, rectitud, y experiencia están en la obligación de respetar y hacer respetar el derecho de la constitución, ésta y sus principios, en la forma que allí ella misma lo establece”*, como si estos órganos no fueran capaces de vulnerar derechos humanos.

---

55 Al respecto, la Sala señaló: *“No obstante que el amparo es el género y el hábeas corpus la especie, lo cierto es que Costa Rica adoptó -constitucionalmente- desde mediados del siglo pasado el hábeas corpus como un medio de garantizar el principio de libertad individual que a favor todos sus habitantes se plasma en las diferentes cartas políticas que han regido sus destinos. Por muchos años, país legalista, toda vez que su legislación se conformaba en un todo con aquellos principios constitucionales, la figura del hábeas corpus se desarrolló en legislación que le dieron contenido formal, históricamente, aun contra autoridades judiciales, no propiamente porque se dudase de los jueces, sino sobre todo para que los habitantes no sufrieran el irrespeto de sus garantías al ser detenidos, o encarcelados, en contra de los principios constitucionales que garantizaban su libertad, merced a la argucia, sobre todo, de acreedores, valiéndose de legislación vigente, y sin que el juez pudiera hacer nada para evitarlo por no corresponderle el pronunciamiento, ya que el conocimiento del recurso siempre fue de la Corte Suprema de Justicia, a la que también correspondía ejercer el régimen disciplinario de los funcionarios del Poder Judicial. La experiencia fue que -por aquellas circunstancias- el sistema dio buen resultado y constituyó también -para los jueces mismos- una garantía de que aun con aplicación de la Ley, que ellos no podían modificar, sí existía el medio expediente para reparar prontamente la injusticia. El amparo, en cambio, no aparece sino hasta la primera mitad de este siglo, en la Constitución que nos rige y -desde su concepción- desde luego sin que fuera aplicable a la actividad jurisdiccional.”*



La confusión plasmada en el Voto de mayoría de la sentencia es severamente criticada en el Voto salvado de los Magistrados Piza Escalante y Solano Carrera, quienes indicaron: *“no es posible, por ello confundir, ni siquiera a efectos meramente técnicos el control de constitucionalidad de las leyes u otras normas o actos sujetos al derecho público, con las garantías constitucionales de los derechos y libertades fundamentales. Como se ve, ni lo hace la Constitución, ni lo hace la Ley de la Jurisdicción Constitucional; por lo demás, el artículo 30 inciso b) de esta última no tiene ni tuvo nunca el propósito de armonizar el amparo con la exclusión de los actos jurisdiccionales del control de constitucionalidad establecido en el artículo 10 de la Constitución, tanto así que fue en el proyecto de dicha norma legal donde la Corte Suprema de Justicia había propuesto excluir del amparo todos los actos del Poder Judicial, incluso los administrativos.”*

También se critica en el Voto salvado las razones dadas por la mayoría del Tribunal Constitucional para admitir una mayor apertura en el hábeas corpus respecto del amparo, como si existiese una diversa categoría de derechos humanos en nuestro ordenamiento jurídico<sup>56</sup>.

De las anteriores consideraciones se infiere, con toda claridad, que no es razonable la restricción contemplada en el artículo 30 inciso b) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, motivo por el cual su inconstitucionalidad debería ser declarada por el Órgano correspondiente. En este sentido, aunque esta materia ya fue conocida por la Sala en el año 1992, desde ningún punto de vista se puede soslayar lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en cuanto a que las resoluciones que denieguen la acción únicamente surtirán efecto entre las partes en el caso concreto y no producirán cosa juzgada.

## Conclusiones

Una vez analizado el tema del amparo contra las resoluciones jurisdiccionales se pueden esbozar las siguientes conclusiones.

En primer lugar, que el recurso de amparo en el ordenamiento jurídico costarricense se infiere del artículo 48 de la Constitución Política, en que se reconoce el derecho de toda persona al proceso de amparo, como una garantía procesal y sustantiva para asegurar el

56 Sobre el particular, se dijo: “SETIMO: Tampoco podemos concurrir en la tesis de la mayoría que pretende justificar diversos tratamientos de hábeas corpus y al amparo, al admitir el primero pero no el segundo contra los actos jurisdiccionales, presumiendo que el derecho de libertad personal haya sido privilegiado en la Constitución sobre los protegidos por el amparo. La verdad, tanto en el Derecho de la Constitución, como en el de los Derechos Humanos en general, es más bien la contraria: en primer lugar, porque ya el segundo ha consagrado, como principio universal, el de que todos los derechos fundamentales son indivisibles, interdependientes y de igual rango, como que todos son, por definición, esenciales a la intrínseca dignidad del ser humano, pero es que, además, tanto en uno como en otro, los derechos de libertad personal y de tránsito -al menos- se encuentran dentro de los que pueden ser suspendidos en situaciones de emergencia o de excepción, mientras que nunca pueden serlo otros muchos, meramente amparables, como los derechos a la igualdad sin discriminación, a la no retroactividad o a las garantías judiciales, según puede observarse de los artículos 121 inciso 7, 140 inciso 4 de la Constitución, 4 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; circunstancia que, por cierto, ha llevado a una buena parte de la doctrina ius internacional a considerar que son los derechos y libertades no suspendibles -y no los que sí pueden ser suspendidos, como el de libertad personal- los que pueden considerarse incorporados al dominio del “Ius cogens”, es decir, de las normas imperativas de Derecho Internacional que no pueden ser derogadas por la voluntad de los Estados, mediante tratados. Con otras palabras: de ser válida la tesis de la mayoría, de que sean aplicables al amparo las limitaciones al control de inconstitucionalidad establecidas en el artículo 10 de la Constitución, con igual, o incluso con mayor razón tendrían que ser aplicables al hábeas corpus, con lo que la sentencia, para ser congruente, debía haber declarado inconstitucional, por conexión o consecuencia, en los términos del artículo 89 de la Ley de esta Jurisdicción, la posibilidad de hábeas corpus contra actos jurisdiccionales de los tribunales de justicia.”

goce inmediato y oportuno de los derechos consagrados en la Constitución Política, como en los Instrumentos Internacionales en materia de Derechos Humanos aplicables en la República, salvo los que son objeto de protección a través del hábeas corpus, sea la libertad y la integridad personales.

En segundo, a partir de la reforma a los artículos 10, 48, 105 y 128 de la Constitución Política, efectuada por medio de la Ley Nº 7128 de 18 de agosto de 1989, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia goza de la competencia para declarar la inconstitucionalidad de una norma que lesiona el Derecho de la Constitución -es decir el control de constitucionalidad propiamente considerado, que puede ser a priori o en lo sucesivo- de resolver los conflictos de competencia entre los órganos constitucionales, así como la jurisdicción constitucional de la libertad, mediante los procesos de amparo y de hábeas corpus.

Por su parte, en el ordenamiento jurídico costarricense no existe la posibilidad de interponer un recurso de amparo contra actuaciones y resoluciones jurisdiccionales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 inciso b) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Aunque esta restricción se podría sustentar en el artículo 10 constitucional que excluye del control de constitucionalidad las decisiones de los órganos jurisdiccionales, dicho razonamiento parte de una confusión indebida entre el control de constitucionalidad y la jurisdicción constitucional de la libertad, la cual está regulada en el artículo 48 de la Constitución Política, que no establece ninguna limitación a la facultad de que goza toda persona de interponer el proceso de amparo.

De modo que el Legislador estableció una limitación que no tiene asidero en la Norma Fundamental, en cuya virtud quedan exentos de control las violaciones de los derechos humanos que se produzcan con motivo de la actividad jurisdiccional. Este tema fue conocido por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia Nº 2277-92 de las 16:30 hrs. de 18 de agosto de 1992, quien determinó por mayoría que la norma impugnada no lesiona el Derecho de la Constitución.

No existe ninguna razón que permita justificar el hecho de que se pueda interponer un recurso de hábeas corpus contra una resolución jurisdiccional, pero no un recurso de amparo, teniendo en cuenta que ambas son diversas manifestaciones de la jurisdicción constitucional de la libertad, en los términos en que está regulada en el artículo 48 de la Constitución Política.

## Bibliografía

Bidart Campos, German. Derecho de amparo. Ediar Editores, Buenos Aires, Argentina, 1961, pp 287.

Brenes Montoya, Maria Marta. El incumplimiento de las resoluciones de amparo. Tesis para optar al título de Licenciada en Derecho. Universidad de Costa Rica, San José 2005. pp 20.

Brewer Carias, Allan. El amparo a los Derechos Humanos y a las libertades constitucionales (una aproximación comparativa). XI Curso Interdisciplinario en Derechos Humanos. Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José, Costa Rica, 1993.

Carvajal Pérez, Marvin. O recurso de amparo na Costa Rica. Revista jurídica de Macau. Número especial. O direito de amparo en Macau e em direito comparado. 1999, pp 273.

Ferrer Mac-Gregor, Eduardo. Del amparo nacional al amparo internacional.  
<http://realidadjuridica.uabc.mx/realidad/files/amparo.doc>. pp 3.

García Morillo, J. Derecho Constitucional, tercera edición. Tirant lo Blanch. Valencia, 1997. pp 458 a 460.

Canotilho, José Joaquín Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 3 Edição. Livraria Almedina Coimbra, 1998, pp 372.

González-Trevijano Sánchez, Pedro José. EL Tribunal Constitucional. Editorial Aranzadi, Sociedad Anónima, Navarra, España, 2000. pp 121.

Guzmán Hernández, Martín Ramos. El amparo fallido. Publicación de la Corte de Constitucionalidad, segunda edición, Guatemala, 2004. pp 48 y 49.

Hernández Valle, Rubén. Derecho Procesal Constitucional. Editorial Juriscentro, Sociedad Anónima, Segunda Edición, San José, Costa Rica, 2001 pp 205.

Piza Escalante, Rodolfo. La Justicia Constitucional en Costa Rica. Investigaciones Jurídicas, Sociedad Anónima, San José, Costa Rica, pp 87.

Piza Escalante, Rodolfo. Legitimación Democrática en la Nueva Justicia Constitucional de Costa Rica. En el Libro Homenaje a Eduardo Ortiz Ortiz. Patrocinado por el Colegio Santo Tomas de Aquino de la Universidad Autónoma de Centro América. San José, Costa Rica, 1993. p 80.

Tocora, Luis Fernando. Control Constitucional y Derechos Humanos. Ediciones Librería del Profesional. Santa Fe de Bogotá, Colombia, primera edición, 1992. pp 108 y 109.

## Sentencias

- Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia Nº 2002-11445 de las 09:30 hrs. de 29 de noviembre de 2002.
- Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia Nº 2005-10597 de las 15:37 hrs. de 16 de agosto de 2005.
- Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia Nº 3180-93 de las 15:18 hrs. de 6 de julio de 1993.
- Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia Nº 4126-97 de las 18:06 hrs. de 16 de julio de 1997
- Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia Nº 5483-94 de las 18:51 hrs. de 21 de septiembre de 1994
- Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia Nº 678-91 de las 14:16 hrs. de 27 de marzo de 1991.
- Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia Nº 7643-97 de las 12:54 hrs. de 14 de noviembre de 1997.
- Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia Nº 93-90 de las 10:00 hrs. de 24 de enero de 1990.
- Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, sentencia Nº 3988-92 de las 15:39 hrs. de 15 de diciembre de 1922.
- Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, sentencia Nº 2001-8239 de las 16:07 hrs. de 14 de agosto de 2001.
- Tribunal Constitucional Español, Auto 106/1980, de 26 de noviembre.